

**AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**

RESOLUCIÓN DE ADMISIÓN No. ANTAI-PDP-049-2022. Panamá, tres (3) de agosto de dos mil veintidós (2022).

**LA DIRECTORA ENCARGADA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
DE LA AUTORIDAD NACIONAL
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION**

En uso de sus facultades legales y considerando,

Que la Constitución Política de la República de Panamá, en su artículo 42, establece el derecho que tiene toda persona a acceder a la información personal contenida en base de datos o registros públicos y privados, y a requerir su rectificación y protección, así como su supresión, de conformidad con lo previsto en la ley.

Que dicha garantía fundamental dispone además que esta información solo podrá ser recogida para fines específicos, mediante consentimiento de su titular o por disposición de autoridad competente con fundamento en lo previsto en la ley.

Que el artículo 4, de la Ley No. 33 de 25 de abril de 2013, dispone que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información tiene entre sus objetivos ser el organismo rector en materia de protección de datos personales.

Que mediante la Ley No. 81 de 26 de marzo de 2019, se promulgó el régimen general de protección de datos personales con el objeto de establecer los principios, derechos, obligaciones y procedimientos que regulan la protección de datos personales de las personas naturales en la República de Panamá y en la misma se estableció, además, una prórroga para su entrada en vigor, efectiva a partir del 29 de marzo de 2021.

Que la Ley No. 81 de 26 de marzo de 2019, constituye el marco general de defensa del derecho a la protección de datos personales en la República de Panamá y, por tanto, debe ser considerada como el estándar mínimo de cumplimiento en relación con la protección de datos personales por cualquier ley especial en la materia y por cualquier entidad reguladora.

Que el artículo 7, de la Ley No. 81 de 26 de marzo de 2019, atribuye facultades de supervisión y fiscalización de dicha normativa a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.

Que el artículo 17, de la Ley No. 81 de 26 de marzo de 2019, dispone que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información es la autoridad competente en la materia.

Que, a través de correo electrónico, la señora [REDACTED] pone en conocimiento de esta Autoridad, la comunicación que recibió de la empresa **Compre o Alquile**, descrita a continuación:

“Me gustaría realizar una denuncia a la empresa Compre o Alquile toda vez que, aun cuando mi cuenta electrónica registrada está eliminada, sigo recibiendo correos de parte de ellos. Ayer les solicité amablemente no seguir enviándome estos correos ya que no tienen mi consentimiento para ello, no obstante, los sigo recibiendo.” (Cit) (Visible a foja 1)

Del análisis del correo recibido, es oportuno destacar que la señora [REDACTED] hace una descripción sucinta de que la empresa **Compre o Alquile**, están remitiéndole información de mercadeo de sus productos, aun cuando su cuenta de correo ya ha sido eliminada de la base de datos de dicha empresa; sin embargo, no suministró la documentación por medio de la cual ejerció de manera formal su derecho a la cancelación de su dato personal con la empresa antes mencionada, tal cual se describe en el artículo 27 del Decreto Ejecutivo No. 285 de 28 de mayo de 2021, así:

Artículo 27: Ejercicio del derecho de cancelación. Cuando el titular de los datos ejercite el derecho de cancelación deberá indicar es su solicitud a que datos se refiere. Deberá acompañar cuando sea preciso la documentación que sustente la cancelación.

Procederá a la cancelación cuando:

- 1. Los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo.*
- 2. El interesado retire el consentimiento en que se basa el tratamiento y éste no se base en otro fundamento jurídico.*
- 3. El interesado se oponga al tratamiento y no prevalezcan otros motivos legítimos para el tratamiento.*
- 4. Los datos personales hayan sido tratados ilícitamente.*
- 5. Los datos personales deben suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal que se aplique al responsable del tratamiento.*

El responsable del tratamiento comunicará cualquier cancelación a cada uno de los destinatarios a los que hayan comunicado los datos personales, salvo que sea imposible o exija un esfuerzo desproporcionado. El responsable informará al interesado acerca de dichos destinatarios si así lo solicita. (Cit)

En este contexto es dable advertir que esta Autoridad de control, está facultada para realizar investigaciones administrativas, por las presuntas violaciones que denuncien los titulares de los datos personales, tal cual lo indica el artículo 36 de la Ley No. 81 de 26 de marzo de 2019, en los siguientes términos:

Artículo 36. “La Autoridad nacional de Transparencia y Acceso a la información, a través de la Dirección creada para conocer esta materia, está facultada para sancionar a la persona natural o jurídica responsable del tratamiento de los datos personales, así como al custodio de la base de datos, que por razón de la investigación de las quejas o denuncias que se les presenten y se les compruebe que han infringido los derechos del titular de los datos personales”. ... (Cit) (el resaltado es nuestro)

Dicho lo anterior, la protección de datos personales, al constituirse como un derecho humano, establecido en el artículo 42 de nuestra Constitución Política, como una garantía fundamental, pertenece a la categoría de los denominados "*derechos personalísimos o de la personalidad*" los cuales constituyen una inconfundible categoría de derechos subjetivos esenciales, que pertenecen a la persona por su sola condición humana y que se encuentran respecto de ella en una relación de íntima conexión, casi orgánica e integral, por lo tanto su reivindicación solo puede ser ejercida por su titular o en virtud de un apoderado judicial debidamente acreditado para actuar en su nombre y representación.

Al respecto, si bien el artículo 77 de la Ley No. 38 de 31 de julio de 2000, que regula el procedimiento administrativo general, dispone que "*La presentación de las denuncias y quejas ante la Administración Pública no requiere de formalidades especiales o estrictas, por lo que podrán presentarse en forma verbal (en cuyo caso se levantará la correspondiente acta que firmará la persona querellante o denunciante), en forma escrita, por telegrama, mediante fax y cualquier otro medio idóneo para hacer de conocimiento de la Administración Pública los hechos y las razones que las originaron*"; esta informalidad corresponde en el evento que el propio titular del dato personal, ejerza su propia representación, para incoar de forma efectiva una denuncia.

Del contenido del artículo 36 de la Ley No. 81 de 26 de marzo de 2019, podemos colegir que uno de los requisitos "*sine qua non*" que se requiere para poder incoar una denuncia o reivindicación de alguno de los derechos en materia de protección de datos personales, es que el titular de los datos personales, describa de forma clara cómo ha sido violado su derecho; es decir, que debe ejercer la "*legitimación activa*", la cual según el fallo de 16 de mayo de 2012, de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo debe entenderse como:

"A propósito de la legitimación, el autor Davis Echandia señala que, "hay peticiones que sólo corresponde hacerlas a determinada persona y frente o contra otras determinadas, y no por o contra los demás. Es decir, se puede ser parte en un proceso, pero no ser la persona con interés sustancial para obtener o controvertir las declaraciones que se impetran..."

En sentencia, de fecha 19 de diciembre de 2003, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia señaló lo siguiente:

"...

El gran procesalista español JAIME GUASP (q.e.p.d.) analizó el tema de la legitimación en causa, señalando que "la legitimación sustancial es la consideración especial en que tiene la ley, dentro de cada proceso, a las personas que se hallan en una determinada relación, con el objeto del litigio y, en virtud de la cual exige, para que la pretensión procesal pueda ser examinada en cuanto al fondo, que sean precisamente dichas personas las que figuren como partes en tal proceso o, lo que es lo mismo, la necesidad de que una cierta demanda sea propuesta por o sea propuesta frente a

RESOLUCIÓN DE ADMISIÓN No. ANTAI-PDP-049-2022
PDP-056-2022

ciertas personas que son los legitimados para actuar como partes en un proceso determinado" (JAIME GUASP, *Derecho Procesal Civil*, Tomo I, pág. 185).

El procesalista español JUAN MONTERO AROCA, comentando la posición de ANDRES DE LA OLIVA sobre la legitimación, señala:

"Los derechos subjetivos privados no se pueden hacer valer sino por sus titulares activos y contra los titulares de las obligaciones relativas, y por eso la legitimación no es un presupuesto del proceso, sino un presupuesto de la estimación o desestimación de la demanda, o, si se prefiere, no es un tema de forma sino de fondo. Los temas de forma o procesales condicionan el que se dicte una sentencia sobre el fondo del asunto; el tema de fondo condiciona el concreto contenido de la sentencia. Si falta un presupuesto procesal, como es la capacidad, no se dicta sentencia sobre el fondo, sino meramente procesal o de absolución en la instancia; si falta la legitimación, sí se dicta sentencia sobre el fondo, denegándose en ella la tutela judicial pedida."

(J. Montero Aroca, *"La legitimación en el proceso civil"*, pág. 32-3, Madrid, 1994, España)

La legitimación ad causam es un presupuesto para la sentencia de fondo, ya que determina quienes deben o pueden demandar; es decir, el proceso necesita que actúen quienes han debido hacerlo, por ser las personas físicas o jurídicas idóneas para discutir sobre el objeto concreto de la litis, como enseña OSVALDO GOZÁINI (autor citado, "La legitimación en el proceso civil", pág. 102, Buenos Aires, 1996)." (Cit)

En consecuencia, del análisis pormenorizado de lo manifestado por la señora [REDACTED] no encontramos la aportación de ninguna documentación que acredite la solicitud formal del derecho de cancelación de los datos personales, ejercido frente a los responsables del tratamiento de ellos datos personales, motivo por el cual no se puede acreditar que la empresa **Compre o Alquiler** ha vulnerado los derechos que le asigna la Ley No. 81 de 26 de marzo de 2019, a la denunciante.

No obstante, debemos reiterar que la Ley No. 81 de marzo de 2019 y su reglamentación, busca proteger de forma efectiva el uso consentido y tratamiento justo del dato personal de los titulares del derecho y que esta Autoridad de control, puede iniciar investigaciones por quejas o denuncia debidamente formalizadas, mediante las cuales se solicite la reivindicación de los derechos que le otorga la Ley No. 81 de 26 de marzo de 2019 en materia de protección de los datos personales.

Por lo anterior, la suscrita Directora Encargada de Protección de Datos Personales, de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, en uso de sus facultades legales,

RESUELVE:

PRIMERO: NO ADMITIR la denuncia presentada por la señora [REDACTED] por los hechos expuestos en la parte motiva de esta Resolución.

SEGUNDO: NOTIFICAR la denunciante de la presente Resolución.

RESOLUCIÓN DE ADMISIÓN No. ANTAI-PDP-049-2022
PDP-056-2022

TERCERO: ADVERTIR que, contra la presente Resolución cabe Recurso de Reconsideración, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

CUARTO: ORDENAR EL CIERRE Y ARCHIVO del presente Proceso.

FUNDAMENTO DE DERECHO:

Artículo 42 de la Constitución Política.

Artículos 4 numeral 2; artículo 6 numeral 17 de la Ley No. 33 de 25 de abril de 2013.

Ley No. 38 de 31 de julio de 2000.

Ley No. 81 de 26 de marzo de 2019

Notifíquese y Cúmplase,

LCDA. YELENIS ORTÍZ DE MARISCAL
DIRECTORA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, ENCARGADA

YO/OC/wrq
Exp. PDP-056-2022